

VI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2004.

Redes Sociales y Políticas Sociales en el habitat Popular urbano: En Busca de las articulaciones perdidas.

María Mercedes Di Virgilio.

Cita:

María Mercedes Di Virgilio (2004). *Redes Sociales y Políticas Sociales en el habitat Popular urbano: En Busca de las articulaciones perdidas*. VI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-045/22>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

REDES SOCIALES Y POLÍTICAS SOCIALES EN EL HÁBITAT POPULAR URBANO: EN BUSCA DE LAS ARTICULACIONES PERDIDASⁱ

María Mercedes Di Virgilio

IIGG-UBA/ICO-UNGS

Las distintas formas que asume el hábitat popular urbano y los distintos tipos de viviendas que los sectores de menores ingresos habitan en la ciudad tienen consecuencias y repercusiones en la vida de sus residentes. La elección de una vivienda y de un barrio depende de una diversidad de factores. Por un lado, las familias eligen una viviendaⁱⁱ y su localización en función de su situación económica, de su autopercepción y de la del entorno barrial, de la evaluación de sus capacidades económicas para hacer frente a los gastos que esa vivienda impone, etc. En segundo lugar, depende de los factores del contexto -- entre ellos, las políticas socio habitacionales -- que definen, en parte, el universo de opciones con base en el cual las familias toman decisiones y definen objetivos que les permiten dar respuesta a sus necesidades habitacionales (Prseworski, 1982). Por último, la vivienda y el entorno en el que se localiza demanda y desarrolla estrategias específicas. Barrios y localizaciones particulares en la ciudad favorecen comportamientos y prácticas específicas y, sumado a los factores del contexto, constituyen elementos intrínsecos del proceso de producción, construcción y reproducción de la vida social.

Ahora bien, para resolver y dar solución a sus necesidades habitacionales, individuos y familias desarrollan diferentes y múltiples estrategias que,

fundamentalmente, se vinculan con su capacidad para movilizar los recursos a los que tienen acceso.

De la intersección de ambas temáticas – necesidades habitacionales y acceso a recursos -- surge una línea de trabajo, centrada en las estrategias de habitacionales de los hogares (Di Virgilio, 2003), que permite dar cuenta de los cursos de acción y las decisiones que toman las familias, así como los objetivos que ellas persiguen para satisfacer sus necesidades habitacionales. En este marco, se asume que es en las prácticas, en las decisiones, en los proyectos y en los movimientos que las familias realizan para satisfacer sus necesidades habitacionales y permanecer en el territorio, en donde se articulan la posición de las familias en la producción y en el consumo y los factores del contexto que operan como restricciones al comportamiento de los actores -- los ciclos económicos, las características de la estructura del empleo local, las tendencias en el mercado inmobiliario, etc.

Este abordaje permite asomarse a la caja negra del hogar y analizar la importancia que alcanzan, en la vida cotidiana de las familias de sectores populares, las organizaciones comunitarias y las redes de ayuda mutua como recursos que se movilizan para satisfacer sus necesidades habitacionales. Las investigaciones sobre hábitat popular (Di Virgilio, 2003; Herzer et al. 1997 y 2000) ponen en evidencia que las preocupaciones, problemas y demandas vinculados al hábitat están fuertemente atravesados por una dimensión, que excede el plano individual, y que remite a la cuestión de los lazos sociales que se ponen en juego cuando los diferentes miembros del hogar movilizan recursos de las redes sociales a las que

pertenecen. De este modo, la pertenencia a redesⁱⁱⁱ de intercambio y a organizaciones sociales constituye una herramienta central para satisfacer las necesidades de vivienda (Ozuekren y Van Kepen, 2002) y garantizar la permanencia en el territorio.

El objetivo de las estrategias vinculadas a la participación en redes sociales y en organizaciones sociales con base territorial es generar y participar en un sistema de intercambios o red de ayudas mutuas que les permiten a los hogares aumentar su potencial de ingresos y modificar la relación entre necesidades y recursos. En la medida en que la red se constituye como “un complejo sistema de vínculos que permiten la circulación de bienes y servicios, materiales o inmateriales, en el marco de las relaciones establecidas entre sus miembros” (Bertrand, 1999:120), la reproducción de las unidades domésticas depende, en parte, de su capacidad para gestionar y sostener relaciones sociales que le permitan tener acceso a ese sistema de intercambios (Espinoza, 1993 y 1999).

Existe una diversidad de tipos de redes y de modos de funcionar que generan institucionalidades heterogéneas y diversas (Mallimaci, 1995:196). Hay arreglos organizacionales más vinculados al ámbito privado de la familia y que contribuyen a la reproducción inmediata de los individuos y las unidades domésticas; hay, también, respuestas más sociales y colectivas -microgrupos/mesogrupos o macrogrupos, al decir de Menéndez (1998:17)- que lo hacen de manera más indirecta y mediata (Jelín; 1998:103).

Dada la capacidad que tienen para generar una multiplicidad de recursos, la participación de los sectores populares en estas redes y en los espacios de organización es reconocida por la bibliografía como parte sustantiva de las acciones dirigidas a solucionar o por lo menos a limitar los principales problemas que los afectan. La red opera como multiplicadora de otras formas de capital – económico, cultural, etc. – en pos de la consecución de determinados objetivos (Baranger, 2002). Asimismo, las redes familiares y sociales vinculan a las familias al acceso a recursos de los programas sociales y a los servicios públicos. Sin embargo, reconocer su importancia en la vida cotidiana de las familias, en general, y en sus posibilidades de acceso y permanencia en el hábitat, en particular, no debe empañar nuestra capacidad para revisar las condiciones en las que el intercambio y la movilización de recursos de las redes sociales son posibles.

A tal fin analizaré cuáles son las tensiones implícitas en los procesos de participación en experiencias vinculadas al acceso a recursos de los programas sociales y a servicios públicos que tradicionalmente constituyeron también la columna vertebral de transferencias desde el estado hacia los sectores de bajos ingresos. Mi intención no es realizar un debate teórico-conceptual sobre el tema, tarea que se acercaría mucho más a las competencias de un especialista sobre teorías del estado y de la democracia. Los apartados que siguen tienen como objetivo, más bien, enriquecer un instrumental teórico-metodológico que permita delimitar la eficacia de estos mecanismos de supervivencia y tratar de identificar hasta qué punto, al ser considerados en el diseño de proyectos y programas sociales, contribuyen a mejorar las condiciones de vida de los sectores populares.

Existen diferentes arreglos organizacionales vinculados al acceso a recursos de los programas sociales y a los servicios públicos, pero ¿cuáles son los tipos de participación que se expresa en las distintas unidades y actores sociales? Tomando como referencia los hallazgos de investigaciones propias y de otros investigadores, podemos distinguir distintos tipos. Los mismos no se plantean como tipos puros de participación sino que, más bien, intento ilustrar la lógica dominante que en los distintos casos subyace en los procesos de interacción social. En este sentido, vale la pena advertir que la mayoría de las veces nos encontraremos con situaciones híbridas o combinaciones en las que coexisten diferentes lógicas.

Iniciativas colectivas: ¿un recurso para la sobrevivencia?

Esta forma de participación se genera fundamentalmente en torno al ámbito doméstico y a actividades vinculadas a la supervivencia y/o convivencia cotidiana: limpieza de espacios colectivos, instalación o regularización de servicios públicos, etc. Puede incluir redes de intercambio, así como la movilización de recursos individuales y/o microgrupales espontáneos (Menéndez; 1998:16). En este nivel la participación opera en términos de ayuda mutua a partir de actividades producidas espontáneamente que suponen la construcción y el desempeño de roles específicos.

Las investigaciones sobre hábitat popular ponen de manifiesto que la trama conformada por relaciones de parentesco y vecindad constituye una de las formas organizativas con incidencia significativa en los procesos de gestión del hábitat.

Las redes familiares constituyen un elemento central en torno al cual se estructuran las estrategias habitacionales de los sectores populares urbanos. Se constituyen en uno de los recursos más movilizadas para hacer frente a la resolución del problema habitacional u otros problemas de la vida cotidiana. En particular, parecen ser eficaces cuando es necesario recurrir a soluciones corresponsables -- que suponen la incorporación a un grupo residencial pre-existente -- para resolver necesidades habitacionales. La corresponsabilidad no parece ser la única manera que adopta “*el vivir juntos*”. Otra de las formas que adopta este vivir juntos en la ciudad es la de compartir el terreno pero no la vivienda. Aparece como una estrategia frecuente autoconstruir una vivienda propia detrás de o en altura sobre la vivienda de la familia de origen. De este modo, las estrategias de autoconstrucción constituyen una forma frecuente de producción del espacio urbano, en particular, en el Conurbano Bonaerense. Otros, en cambio, eligen vivir juntos como una familia extendida en diferentes viviendas en un mismo barrio o incluso en un mismo conventillo (Di Virgilio, 2003). Las redes familiares están presentes e intervienen activamente en otras estrategias tendientes a resolver los problemas habitacionales; intervienen como informantes clave en la búsqueda del terreno o la vivienda, en la construcción, en la financiación, etc. (Déchaux, 1998; Mascarell Llosa, 2002).

Una investigación sobre ocupación de inmuebles en la traza de la ex AU3iv en la ciudad de Buenos Aires (Herzer et.al.; 1997) muestra, también que los inmuebles vacantes, disponibles para ser ocupados, se localizan a través de relaciones personales: individuos ligados al barrio que operan como *abridores de casa*’;

punteros de partidos políticos que permiten, a veces mediante el pago de una suma de dinero, que las familias se instalen; familiares ya radicados en la zona; conocidos que trabajan en el aparato municipal y que les allanan el camino hacia la ocupación e incluso les hacen recomendaciones sobre los sitios más convenientes a ocupar. Estas relaciones de vecindad, en términos generales, se refieren a la trama de vínculos más inmediatos y cotidianos, que se genera en un ámbito restringido -el mismo edificio, las casas lindantes o las de la vereda de enfrente. Las referencias a quienes comparten su situación, pero se encuentran localizados a más distancia (cien metros), son vagas y genéricas. Sólo quien ha tenido una trayectoria diferencial en términos de participación activa, en intentos de organización de los ocupantes o quienes poseen una inserción político partidaria y que, a veces, actúan como punteros barriales, tienen una perspectiva más amplia, capaz de construir discursivamente a un sujeto vecino-ocupante que se identifique con el conjunto de las personas que comparten la misma situación dentro del territorio demarcado por la traza de la ex-AU3. Se destaca la unión de los vecinos para el mantenimiento edilicio y algunas acciones de mejoramiento barrial que tienen por objetivo lograr su aceptación como vecinos de un barrio de sectores medios y medios altos. También, se generan estas formas participativas en torno a la gestión y/o regularización de la prestación de servicios públicos de consumo colectivo. Es decir, en situaciones en donde en el inmueble hay un único medidor de agua o electricidad y las familias que lo ocupan deben hacerse cargo colectivamente del pago del servicio.

En torno a la gestión de servicios públicos se conforman escenarios v privados que no superan la dimensión privada de la vida cotidiana (Pírez, Martínez Mendoza y Navarro; 1998): de cada casa, de cada familia o de un grupo de familias ocupantes. La modalidad que adquiere la participación en esos escenarios se halla próxima a la categoría de lo particular privado (Coraggio, 1989), en cuanto las acciones y las decisiones surgen y se hacen efectivas individualmente, a partir de la iniciativa de cada vecino hacia las múltiples instancias, públicas o privadas, que se constituyen en el referente obligado para la canalización de las demandas (Herzer et. al.; 2000). No se genera un escenario público de gestión pues no se ha constituido aún un sistema de relaciones que facilite la emergencia de procesos colectivos. La gestión de servicios públicos se resuelve en un escenario privado, esto es, un escenario de mercado.

Estas redes informales pueden dar lugar a unidades sociales suprafamiliares que también pueden hacerse cargo de la reproducción de las unidades domésticas a través de la organización, por ejemplo, de formas colectivas de consumo. Las ollas populares o los comedores comunitarios son ejemplos de estas respuestas sociales. En el barrio de La Boca, por ejemplo, existe una amplia red de comedores infantiles y comunitarios que, financiados por la Secretaría de Promoción Social del Gobierno de la Ciudad constituyen respuestas a las necesidades alimentarias de las familias pero sin llegar a plasmar modelos de organización de las tareas cotidianas alternativos a la domesticidad familiar ni a reconocer un espacio de acción colectiva común. Más bien constituyen espacios

cuasi privados, fragmentados y atomizados de gestión de la cotidianeidad (cf. Herzer et al, 2004).

Las redes de relaciones incluyen, también, relaciones con punteros políticos, quienes a través del partido político con acceso directo a recursos estatales contribuyen a satisfacer las necesidades de alimentación, salud o empleo de las familias de sectores populares (Auyero; 1998; Herzer et al, 2004). Muchas veces por intermedio de los punteros políticos se distribuyen los recursos que llegan desde los gobiernos locales a las agrupaciones partidarias. Pero más importante que los recursos materiales que ellos distribuyen o pueden distribuir de manera efectiva es la información que circula por la mediación de estos actores sociales, relativa, por ejemplo, a la distribución de alimentos o al acceso a programas sociales. Es esto lo que los constituyen en protagonistas de las redes de intercambio que sostienen la vida cotidiana de los sectores de menores ingresos. La investigación de Auyero (op. cit.) sobre el clientelismo político en barrios pobres del Conurbano Bonaerense aporta evidencia empírica en este sentido, destacando la importancia de estas relaciones en la red de resolución de problemas de la vida cotidiana.

El acceso a los beneficios de los programas sociales que en la actualidad se implementan en el Conurbano Bonaerense parece estar mediado, también, por este tipo de relaciones. En el caso de Programa MAS VIDA,^{vi} por ejemplo, la percepción de la ayuda está estrechamente vinculada a las características personales de las trabajadoras vecinales o *manzaneras*, a las de los monitores y promotores y al tipo de relación que establecen con las familias beneficiarias. Los

contactos personales con la *manzanera* habilitan la incorporación ex post de familias no relevadas oportunamente a través del censo realizado en el marco del programa para la captación de beneficiarios; como así también permite recibir raciones extras, sobrantes de la primera distribución, o flexibilizar los horarios en los que habitualmente se reciben los alimentos (véase entre otros Andrenacci et.al.; 1999:47).

En el caso de los planes de asistencia al empleo,^{vii} los contactos y los lazos personales que brindan información acerca de los lugares y los plazos habilitados para la posterior incorporación al programa parecen ser, también, una de las posibles vías de acceso al mismo, en particular cuando el ingreso se produce a través de las oficinas de empleo de los municipios.

Estas formas de participación expresan la capacidad que tienen los sectores populares para articular respuestas que suponen la movilización de redes y recursos colectivos pero que no necesariamente se plasman en modalidades innovadoras de acción colectiva. En general, en cuanto las necesidades son satisfechas o los servicios básicos son provistos las relaciones se debilitan y las actividades barriales colectivas disminuyen circunscribiéndose las relaciones y “encerrándose” en los límites de la propia casa (Cardarelli y Rosenfeld, 1998; Jelin, 1998). Dado el agravamiento de las situaciones de pobreza se consolidan entre los sectores populares prácticas organizativas en torno a la búsqueda independiente de soluciones.^{viii} La organización pública del mantenimiento cotidiano a partir de movilizar redes de intercambio se constituye, en este contexto, en un mecanismo socioeconómico que, en parte, suple la falta de

seguridad social, reemplazándola por un tipo de ayuda mutua basada en la reciprocidad. “El peligro reside en que [...] estas formas de organización asistencialista [...] promuevan tipos de dependencia y sometimiento (basados en la necesidad) que bloqueen el potencial de transformación que la acción colectiva podría llegar a tener en este campo” (Jelin; 1998:104). Sólo a partir de cambios en el sistema político y en las condiciones económicas de las familias es posible pensar la puesta en marcha de acciones alternativas basadas en demandas sociales colectivas (Guimaraes; s/f:13).

Asimismo, es necesario tener en cuenta que la capacidad que tienen los hogares para movilizar recursos no es independiente de otros factores sociales, como por ejemplo, el aumento de la pobreza. La capacidad de los hogares para movilizar recursos de las redes sociales no es independiente de las condiciones generales del desarrollo económico y, en particular, la dinámica del mercado de trabajo, ni de las características de las políticas y programas sociales que facilitan (o constriñen) sus posibilidades de reproducción y de movilidad social (González de la Rocha, 1998). Las condiciones del contexto afectan los vínculos que unen a las familias entre sí pues, en la medida en que el universo de opciones se torna más acotado, la reciprocidad encuentra sus límites.

Dime de dónde vienes y te diré hacia dónde puedes ir

- 1) Participación en organizaciones diseñadas “desde arriba”.

Los programas sociales suelen apelar a estas tramas de organización vecinal en su implementación. Este es el caso, por ejemplo, de la operatoria de financiación directa a la demanda que, desde el año 1996, la Comisión Municipal de la Vivienda desarrolla, con diferentes modalidades, en el barrio de La Boca. Dichas iniciativas otorgan créditos individuales a las familias en situación de emergencia habitacional y de bajos ingresos, para adquirir en forma mancomunada inmuebles en el mercado, con destino a uso habitacional.^{ix} A fines de 1996, culmina una sucesión de un propietario privado que poseía numerosos inmuebles del barrio. Este evento se superpone con una “ola” de juicios de desalojo en inmuebles de propiedad privada y esta nueva coyuntura de "emergencia", favorece la constitución de la Asamblea de Desalojados de La Boca^x que inicia un proceso reivindicativo en reclamo de soluciones habitacionales para las familias afectadas por los desalojos o con problemas de vivienda. En este marco, las organizaciones comunitarias que se constituyen a partir de la Asamblea de Desalojados,^{xi} impulsan la organización de vecinos en riesgo para la compra de algunos inmuebles, a través de la negociación directa con los propietarios privados. En algunos casos, donde la negociación directa no fue posible, los vecinos organizados en forma mancomunada, adquirieron otros viejos inmuebles de propiedad privada que se encontraban en venta en el barrio.^{xii} A través de este mecanismo, se han comprado más de cien edificios tratando directamente con los propietarios.

Más allá de los logros, la operatoria, que estuvo vigente hasta el año 2000, no pudo dar respuesta a algunas cuestiones que resultan críticas en el marco del

análisis de las políticas sociales. Por un lado, no preveía entre sus acciones la rehabilitación de los inmuebles y, por lo tanto, tendió a consolidar situaciones de precariedad habitacional en el barrio. Por el otro, la constitución de condominios sobre propiedades indivisas, plantea una situación conflictiva, por la cual, la cesación del pago individual de una familia perjudica al conjunto, a la hora de ser eventualmente ejecutadas por la CMV. De este modo, la figura de los "créditos individuales mancomunados" supone, en definitiva, que cada familia queda individualmente librada a sus propios recursos y capacidades en términos de pagos y en una situación de enfrentamiento potencial con sus familias vecinas (Di Virgilio, Lanzetta, Redondo y Rodríguez, 2002). Este fenómeno se vincula, directa e indirectamente, con el deterioro de las relaciones salariales y el aumento de la desocupación; ya que participar formal o informalmente en experiencias de autoprovisión de bienes y/o servicios es una inversión posible para aquellos grupos domésticos que cuentan con un ingreso relativamente garantizado y estable. Esa posibilidad se reduce sensiblemente cuando la seguridad del ingreso desaparece (González de La Rocha, 2001 y 2003).^{xiii}

De este modo, muchas de las operatorias que, desde las distintas instancias del gobierno, se dirigen hacia a los sectores populares jerarquizan recursos monetarios en contextos de alto desempleo y ponen en cuestión la posibilidad de las familias de acceder a ellos (Cf. Herzer et al., 1998; Catenazzi y Di Virgilio, 2001). La inexistencia de una oferta de vivienda social ligada a la noción de derecho y dirigida a satisfacer las necesidades de todos los sectores de la población, resalta aún más la importancia de la estructura del empleo como

condicionante del acceso al hábitat. Tener o no tener trabajo limita los recursos con los que cuenta la unidad doméstica y, por ende, es el principal capital que ellas pueden movilizar en relación al acceso a la vivienda. (Badcock; 1994:171).

Asimismo, algunos programas sociales prevén para su ejecución la conformación *ad hoc* de organizaciones de base involucradas en el proceso de implementación y gestión. En general, se trata de organizaciones surgidas a la luz de programas focalizados y/o sectoriales vinculados a políticas de asistencia alimentaria y a los procesos de regularización dominial. Se constituyen como grupos organizados intencionalmente para la realización de acciones inmediatas (proveerse de alimentos, alcanzar la titularidad de la tenencia de los terrenos, etc.). Estas acciones suponen, además, la constitución de una organización formal momentánea o permanente que no necesariamente implica conocimiento y experiencia previamente compartidos de sus miembros (Menéndez; 1998:17).

Los resultados de la investigación realizada en el barrio de La Boca que analiza las modalidades de participación que se desarrollan en torno a procesos de regularización dominial de viejos inquilinatos de propiedad municipal dan cuenta de estas formas de organización.^{xiv} El programa, impulsado por la CMV, retoma los lineamientos del Recup-Boca e involucra en su implementación a una organización barrial, Mutual Esperanza, que nuclea a las familias locatarias de los inquilinatos de propiedad municipal. La Mutual está encargada de la gestión y administración del sistema de recupero y desempeña “roles de articulación social y técnica” (Narváez; 1997:275). Sin embargo, su protagonismo en el proceso de

regularización dominial es muy limitado. Los cambios en el contexto político y económico no sólo pusieron en jaque la legitimidad de la organización sino que además afectaron las posibilidades de continuidad de los miembros.^{xv} El desempleo, también en este caso, limitó ampliamente las posibilidades de los miembros de la organización para continuar con el cumplimiento de las cuotas estipuladas en el plan de regularización. Algunos ni siquiera pueden pagar, por ejemplo, el agua, el único de los servicios que aún deben compartir. Esta situación es percibida como una de las dificultades más importantes en el proceso de regularización dominial. Los vecinos no han generado prácticas de gestión conjunta de los inmuebles; no existen entre ellos instancias de discusión ni de organización que les permitan resolver los problemas comunes. Dichos problemas son identificados como cuestiones individuales y en consecuencia ante ellos se dan respuestas también individuales. Aun cuando existen motivos suficientes para no poder pagar el servicio, no están ausentes las dificultades de estas familias para organizarse en la recolección de los recursos necesarios para la regularización del mismo.

Las actividades administrativas vinculadas a juntar la plata para el pago del consumo de agua y gestionar el mantenimiento de los lugares colectivos son vitales para asegurar el suministro y el mantenimiento de los servicios urbanos colectivos. Sin embargo, en un contexto de falta de recursos materiales y escasa experiencia organizativa, estas tareas ofrecen cada vez mayor dificultad. La operatoria en la cual participan prevé la constitución de un consorcio. Esta nueva instancia de gestión implica una importante transformación en las relaciones de

vecindad, generadas, hasta ahora, a partir de su condición de locatarios. En este proceso, cobran especial importancia cuestiones que no necesariamente fueron tenidas en cuenta en el diseño de la operatoria: el desarrollo de capacidades organizativas y de gestión cooperativa.

Un factor que parece favorecer aún más esta atomización es la falta de información. Los vecinos, por ejemplo, desconocen cuáles son los criterios que definen la asignación de los inmuebles. Desconocen qué pasará con ellos, que cumplen mensualmente con sus obligaciones de pago, y qué ocurrirá con aquellos que no tienen posibilidades de cumplirlas. En fin, aunque están embarcados en esta empresa no saben cuál será su destino. Estas experiencias cobran aún mayor significado cuando observamos que de las 273 familias que nucleaba la Mutual, sólo permanecen 40. El resto de los vecinos o bien ha dejado de pagar o bien ha vendido la llave del inmueble cediendo su lugar a nuevos ocupantes (Di Virgilio, Lanzetta, Redondo y Rodríguez, 2002).

La génesis de la organización, esto es, si se generó por iniciativa de los vecinos o por iniciativa del estado, y la experiencia organizacional que van desarrollando sus miembros no sólo modelan las prácticas sino que en sí mismas constituyen un activo importante para asegurar la generación de “normas de reciprocidad generalizada que sirvan para reconciliar el interés propio con la solidaridad” (Cunil Grau; 1997:161). Las instancias organizativas que se constituyen a los fines de un programa social no siempre tienen la capacidad de recrear las demandas de sus miembros e iniciar un proceso de construcción de las mismas en términos de

problema social. Los modos de institucionalización tienen una importancia clave a efectos del propio refuerzo o del debilitamiento de las redes de reciprocidad que facilitan la cooperación mutuamente beneficiosa en una comunidad (Moser; 1996:16). La bibliografía señala que cuando el aparato estatal tiene injerencia en constituciones de organizaciones sociales, muchas veces, erosiona las reservas de capital social^{xvi} preexistente y consecuentemente, antes que aumentar, disminuye la capacidad de las familias de hacerse oír, de reclamar y de solucionar problemas de su vida cotidiana (Cunil Grau; 1997:112).

Asimismo, los contextos de escasez de recursos representan un gran desafío para las organizaciones involucradas en los procesos de regularización dominial. En muchas ocasiones, esta falta de recursos materiales empuja a algunas familias más allá del punto hasta el cual pueden sostener la reciprocidad y mantener acuerdos con sus vecinos.

Esta dificultad para agregar intereses y de representarlos a través del tiempo también parece haber atravesado la experiencia de los grupos PAIS. El Programa Alimentario Integral y Solidario comenzó a implementarse desde el Ministerio de Acción Social de la Provincia de Buenos a fines de 1989. La propuesta de PAIS se orientó a profundizar el desarrollo de organización social alcanzado en los momentos más agudos de del proceso hiperinflacionario atendiendo la necesidad de asistencia de las familias en situación de pobreza crítica. A tal fin, promovió a escala masiva la formación de grupos de familias para abordar, en una primera etapa, el problema alimentario a través de una subvención ministerial al grupo. La

propuesta significó una importante e inédita transferencia de recursos en dinero a este sector de la población vía la constitución de los grupos PAIS. El grupo PAIS estaba constituido por un conjunto de entre 5 y 20 familias que debían nombrar dos apoderados que recibirían la subvención para la compra de alimentos. Los grupos estaban comprometidos a funcionar los doce meses, brindar alimentación y educación alimentaria, tender a la asistencia integral, posibilitar la formación de comisiones de trabajo que propongan o elaboren emprendimientos productivos o de consumo, fomentando en la comunidad proyectos sociales de base, etc. A su vez los representantes de los grupos PAIS debían participar en otras instancias colectivas de gestión previstas en el programa como los Consejos Alimentarios Locales y el Consejo Alimentario Municipal.

A partir de esta experiencia organizacional de base, el programa, en una segunda fase, preveía la promoción y el apoyo de emprendimientos de autoabastecimiento familiar y grupal tales como huertas, panaderías populares, fábricas de pasta comunitarias, etc. Asimismo, en una tercera fase, tendía a detectar y apoyar en los grupos PAIS la organización de microemprendimientos productivos. Si bien la práctica de administración, gestión y control de recursos en dinero por parte de las familias, así como las gestiones comerciales que debían realizar en el Banco Provincia de Buenos Aires para el cobro efectivo del subsidio o las rendiciones de cuentas ante los Consejos Alimentarios Municipales, implicaron prácticas asociativas que superaron la mera cuestión alimentaria (Chiara, 1995:227); salvo algunas experiencias puntuales, los grupos PAIS se desintegraron sin cuajar necesariamente en emprendimientos de autoabastecimiento o en

microemprendimientos productivos. Entre los 7.000 comedores multifamiliares que existieron en la Provincia de Buenos Aires, se entregaron 500 subsidios para microemprendimientos, muchos de los cuales, en realidad, funcionaban y/o funcionan hasta la actualidad como unidades económicas de subsistencia (Chiara; 1995:227).

El fin de la gestión del Dr. Cafiero en la Provincia de Buenos Aires marcó el fin del Plan PAIS y el desarrollo de las experiencias de los grupos. Las capacidades institucionales (Tobelem; 1993)^{xvii} desarrolladas bajo la tutela del estado no fueron suficientes para sustentar procesos productivos más autónomos.

El estudio llevado adelante por Merlinsky (1997) acerca de los orígenes y la conformación de unidades económicas informales en el Conurbano Bonaerense pone de manifiesto la centralidad que tienen las redes de intercambio preexistentes, en vinculación con políticas públicas y políticas sociales, para asegurar el “éxito” de los emprendimientos productivos. Otros rasgos que parecieran marcar, también, el rumbo de estas formas organizativas son precisamente las capacidades institucionales puestas en juego en el proceso mismo de constitución de la organización. Contar con otros recursos en el hogar que permitan sostener por un tiempo que la remuneración de la mano de obra y los eventuales excedentes se usen para capitalizar el microemprendimiento o el acceso a redes institucionales de comercialización, etc. parecen ser cuestiones centrales para la continuidad de la experiencia.

A pesar de que algunos programas sociales prevén la constitución de organizaciones con base territorial, los arreglos organizacionales se estructuran en torno a criterios de representación funcional (Cunil Grau; 1997:111) sin que se exprese la primacía de la representación territorial.^{xviii} En muchos casos, las organizaciones permanecen como arreglos organizacionales formales, con escasa capacidad para articular intereses territorialmente, en los que la obligatoriedad de la gestión colectiva inhibe la participación antes que facilitarla. Las redes de intercambio preexistentes a las propuestas organizativas que emanan desde los agentes gubernamentales y que han desarrollado ciertas capacidades de organización generan mejores condiciones para el acceso a los beneficios de los programas sociales. Podemos suponer, entonces, que la experiencia organizacional no debe ser considerada sólo como un mero requisito impuesto por la operatoria de los programas sociales sino, más bien, que las políticas deben recuperar experiencias preexistentes de resolución de un amplio espectro de cuestiones cotidianas y colectivas pero en diálogo con las limitaciones que el contexto impone a la reproducción de las familias de menores ingresos.

2) Las organizaciones diseñadas “desde abajo”: una partícula de autonomía.

Estos arreglos organizacionales se refieren habitualmente a grupos que tienen una amplia base de representación territorial, que suponen la construcción y/o el mantenimiento de algún tipo de organización y que, al mismo tiempo que elaboran sus demandas, van encontrando formas de acción para expresarlas. En este proceso se van constituyendo en actores colectivos, reconociéndose como grupo o categoría social (Jelín 1998; Menéndez, 1998). Cunil Grau (1997:159) remarca

la importancia del tejido asociacional en la sociedad en la medida en que el mismo contribuya a democratizar diferentes esferas de la vida social. La autora considera “clave el rol que la red asociacional puede tener en la amortiguación de las inquietudes que el mercado genera [...] De hecho, en tanto la dominación y la privación que también resultan de la operación del mercado, son procesos socialmente mediados, la estructura de mediaciones que acompañe a los individuos puede contrarrestar tales efectos”. Sin embargo, sus potencialidades para ampliar la estructura de opciones de sus miembros no son automáticas. Las mismas parecen estar en estrecha relación con:

→ la historia de las organizaciones y la experiencia asociacionista de las familias y/o vecinos que ellas representan. La trayectoria de las organizaciones las habilita para posicionarse en mejores condiciones en el territorio y para constituirse en un actor social fuerte capaz de canalizar los intereses particulares de los pobladores y hegemonizar dentro del campo barrial la gestión de las demandas sociales. La antigüedad de las asociaciones pone de manifiesto, también, que constituyen espacios de socialización y organización barrial en la medida en que recogen algunas de las necesidades de los vecinos y facilitan su gestión.

→ el grado de formalidad que alcanza la organización. Esta característica, por un lado, les otorga reconocimiento legal ante otros actores sociales y, por el otro, obliga a sus miembros a la participación en la estructura formal de la

organización eligiendo periódicamente sus autoridades y legitimándolas ante los vecinos asociados mediante esos mecanismos formales de elección.

→ la capacidad para cambiar sus objetivos y resignificarlos en función de las nuevas realidades políticas y sociales.

→ el modo en que se definen las líneas de acción y se toman las decisiones, esto es, si la organización presenta un modelo más lineal de toma de decisiones “de arriba hacia abajo” o si genera procesos de ampliación hacia los miembros de base intentando transformar las asimetrías en la representación.

Algunos programas sociales como, por ejemplo, el Manos a la Obra o el Programa Federal de Emergencia Habitacional contemplan la posibilidad de que las organizaciones de base actúen como organismos responsables de su implementación. En estos casos, organizaciones como guarderías, comedores, jardines, centros infantiles o capillas se constituyen en ámbitos a través de los cuales es posible acceder a los beneficios de estos programas. El acceso al beneficio está fundamentalmente mediado por las capacidades de gestión que hayan adquirido las organizaciones a lo largo del proceso de constitución. Presentar un proyecto a fin de que sea financiado por el Programa Federal de Emergencia Habitacional no es tarea sencilla y obliga a desplegar capacidades que, en la mayoría de los casos, están ausentes de la letra de los programas. Organizaciones como el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos en la Capital

Federalix o la experiencia de la Comisión de Tierras del barrio IAPI en Quilmes^{xx} son algunos ejemplos de desarrollos organizacionales de este tipo.

Una cosa que llama la atención cuando el observador se acerca a las organizaciones es la pertenencia que los miembros han desarrollado durante años. No se trata sólo de organizaciones formales, sino de un lugar de solidaridad (Deslauries; 1998:65) sobre el cual se apoya su funcionamiento, al igual que el conjunto de relaciones entre sus miembros. En este sentido, a pesar de que los programas tienen propuestas de participación circunscriptas en servicios públicos y/o sociales singulares, son las capacidades desarrolladas por las organizaciones las que les permiten superar el enfoque sectorial de los programas y recuperar la integralidad a partir de constituirse en articuladoras y distribuidoras de recursos que provienen de diversas fuentes –una de ellas son los programas sociales.

Pensando en cómo ensanchar los límites de la solidaridad

Este recorrido por las diferentes formas que toma la participación pone en evidencia que entre los sectores populares coexisten e interactúan prácticas que responden a lógicas disímiles (cf. Cravino, 1998:278). Las diferentes dimensiones que a lo largo de este trabajo se aíslan para analizar dichos procesos, en la experiencia y en la vida cotidiana de las familias de sectores populares se atraviesan e intrepentran mutuamente definiendo condiciones, limitaciones y potencialidades a los procesos de participación mismos.

No podemos obviar el hecho de que la mayoría de las actividades de participación vinculadas al acceso a recursos de los programas sociales se vinculan a la

participación para la sobrevivencia y a la participación en organizaciones diseñadas desde arriba. Esto parece vincularse con el papel que estas formas de participación cumplen en relación a la reproducción de las unidades domésticas. A diferencia de la participación en los primeros tipos de unidades, en las organizaciones generadas desde abajo el desarrollo de la participación es una acción intencional y volitiva que supone la construcción de organizaciones o instancias específicas y un esfuerzo continuo para asegurar su mantenimiento (Menéndez; 1998:17). Los diferentes arreglos organizacionales y las posibilidades que tienen de reorganizar los lineamientos de los programas sociales guardan estrecha relación con la capacidad que dichas organizaciones tienen para definir objetivos de intervención propios superadores de las necesidades cotidianas que tienen las familias que las integran.

En todos los casos, estos círculos de relaciones pueden ser considerados como capital social que los individuos y/o las familias movilizan para responder a las situaciones a las que desean hacer frente. La potencialidad o las limitaciones de ese capital para resolver la integración social de los individuos y las familias dependerá, tal como señala Rodríguez (1997), de que estos arreglos organizacionales:

Logren articular redes de intercambio preexistentes con políticas públicas y políticas sociales, lo cual redundará en otorgar mayor fortaleza a la red para el desarrollo de estrategias de acción.

Asuman objetivos propositivos. Los objetivos meramente reivindicativos tienden a agotarse cuando ya no se sostienen las condiciones que permitieron su emergencia. Satisfecha la demanda o simplemente desgastada, la organización tenderá a diluirse. Por el contrario, el desarrollo de propuestas tenderá a generar una dinámica de trabajo donde existirán mejores condiciones que aseguren la perdurabilidad de la organización.

Generen, a través de su racionalidad interna y su práctica, una estructura de recursos diversificada, que no se agota en un programa o una política, y que le permita responder con mayor integralidad a las demandas de los miembros.

Sean capaces de establecer alianzas más amplias con otros actores.

Bibliografía

Andrenacci, L. Neufeld, M. R. y Raggio, L. (1999); "Evaluación de programas sociales desde la perspectiva de los beneficiarios. Los programas Vida, PROMIN, Trabajar y Barrios Bonaerenses en los municipios de José C. Paz, Malvinas Argentinas, Moreno y San Miguel". Instituto del Conurbano, Universidad Nacional de General Sarmiento (mimeo).

Auyero, J. (1998); "Desde el punto de vista del cliente. Repensando el tropo del clientelismo político". En *Apuntes de Investigación*. Buenos Aires.

Badcock (1984): *Unfairly Structured Cities*. Oxford: Blackwell. Inglaterra.

- Baranger, D. (2002); "Sobre estructuras y capitales. Bourdieu, el análisis de redes y la noción de capital social". En *Revista de Antropología AVA*. Nº 2. Universidad Nacional de Misiones. Pp. 41 -63.
- Bertrand, M. (1999); "De la familia a la red de sociabilidad". En *Revista Mexicana de Sociología*, nº 2. México. Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Pp. 107-135.
- Bourdieu, P. (1980); "Le Capital social. Notes provisoires". En *Actes de la Recherche en Sciences Sociales*, nº 31. Traducción G. Kessler.
- Cardarelli, G. y Rosenfeld, M. (1998); *Las participaciones de la pobreza. Programas y proyectos sociales*. Buenos Aires. Paidós.
- Catenazzi, A. y Di Virgilio, M. M. (2001); "Ingreso ciudadano y condiciones urbanas: Aportes para una estrategia de política social del gobierno nacional". SIEMPRO - Secretaría de Tercera Edad y Acción Social del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente. Mimeo.
- Chiara, M. (1995); "El modelo de gestión del Programa Alimentario Integral y Solidario: una relectura de su implementación". En Peñalva, S. y Rofman, A. (Comp.) *Desempleo estructural, pobreza y precariedad*. Buenos Aires. Nueva Visión.
- Coraggio, J.L. (1989); "La participación popular: Ideologías y realidad". Ponencia presentada al XIII Seminario Latinoamericano de Trabajo Social. Quito.

- Cravino, M.C. (1998); “Los asentamientos del Gran Buenos Aires. Reivindicaciones y contradicciones”. En Neufeld, M. R.; Grimberg, M.; Tiscornia, S. y Wallace, S. (Comp.); *Antropología social y política: Hegemonía y poder en un mundo en movimiento*. Buenos Aires. EUDEBA.
- Cravino, C., Fournier, M., Neufeld M.R. y Soldano, D. (2002); “Sociabilidad y micropolítica en un barrio bajo planes”. En Andrenacci, L. (Org.); *Cuestión social y política social en el Gran Buenos Aires*. Ediciones Al Margen/UNGS. La Plata.
- Cunil Grau, N. (1997); *Repensando lo público a través de la sociedad. Nuevas formas de gestión pública y representación social*. Venezuela. CLAD/Nueva Sociedad.
- Déchaux, Jean-Hugues (1998); “L’État et les solidarités familiales”. En Paugam, S. (Direction); *L’exclusion l’état des devoirs*. Paris. Éditions la Découverte.
- Deslauries, J.P. (1998); “Hábitat y relaciones sociales”. En Lulle, T.; Vargas, P. Y Zamudio, L. (Coord.); *Los usos de las historias de vida en ciencias sociales*, vol. II. Barcelona. ANTHROPOS/CIDS/IFEA.
- Di Virgilio, M. M. (2000); *La vida cotidiana de las unidades domésticas. Organización social y participación: estrategias para el acceso a recursos de programas sociales*. Serie Documentos de Trabajo. Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. San Miguel.

----- (2003); “Casa se busca. Explorando las relaciones entre estrategias habitacionales, redes sociales y políticas sociales”. Seminario Situación y Desafíos de la Investigación Urbana en el Siglo XXI. UNQ – CEUR – IIGG. Buenos Aires, 21 y 22 de Agosto.

Di Virgilio, M.; Lanzzeta, M.; Redondo, A. y Rodríguez, C. (2002); “Procesos de renovación urbana en Buenos Aires: Percepciones de habitantes de La Boca”. Area de Estudios Urbanos, IIGG. Buenos Aires. Mimeo.

Espinoza, V. (1993); “Social networks among the urban poor. Inequality and integration in latin american city”. Documento de Trabajo, nº 139. SUR, Centro de Estudios Sociales y Educación. Santiago de Chile.

----- (1999); “Dinámica reticular de la desigualdad social de la pobreza de Santiago de Chile en los 90’ “ (mimeo).

González de la Rocha, M. (1998);

----- (2001); “From the resources of poverty to the poverty of resorces? Tehe erosion of a survival model”. En *Latin American Perspectives*, Vol. 28 (4). Pp. 72-100.

----- (2003); “La nueva solidaridad urbana: Vulnerabilidad y agotamiento de recursos”. Ponencia presentada en el Congreso de la Latin American Studies Association, Dallas, 27 al 29 de Marzo.

Guimaraes, R. (s/f); "Participación comunitaria, Estado y Desarrollo: el difícil arte de conciliar lo conflictivo". No se cuenta con datos editoriales.

Gutiérrez, A.T. (1992); ¿Vivir para comer? El consumo de los sectores populares urbanos". En Cariola, C. (Comp.); *op. cit.*

Herzer, H.; Di Virgilio, M.M.; Redondo, A.; Lago Martínez, S; Lanzetta, M y Rodríguez, C. (1997); "Aquí está todo mezclado..." Percepciones de familias ocupantes de inmuebles en Buenos Aires sobre su situación habitacional". En *Revista Mexicana de Sociología*, vol. 59. México. Instituto de Investigaciones Sociales.

Herzer, H.; Di Virgilio, M.M.; Lanzetta, M.; Redondo, A. y Rodríguez, M. C. (1998); "Hábitat popular, organizaciones territoriales y gobierno local en el Area Metropolitana de Buenos Aires. Análisis comparativo de dos estudios de caso". Informe final de investigación, proyecto UBACyT CS032, programación 1995-1997. Buenos Aires. Area de Estudios Urbanos del Instituto de Investigación Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

----- (2000); "The formation of social organizations and their attempts to consolidate settlements and neighbourhoods undergoing transition in Buenos Aires".. *Environment and Urbanization*, vol. 12, nº 1. IIED. London. (abril).

- Herzer, H.; Di Virgilio, M. M.; Rodríguez, C.; Redondo, A. y Ostuni, F. (2004); “Organizaciones sociales en el barrio de La Boca: cambios y permanencias en un contexto de crisis”. En *Revista Estudios Demográficos y Urbanos*. El Colegio de México. México. 2004. (En prensa).
- Jelín, E. (1998); *Pan y afectos. La transformación de las familias*. Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica.
- Mallimaci, F. (1995); “Demandas sociales emergentes: pobreza y búsqueda de sentidos, redes solidarias, grupos religiosos y organismos no gubernamentales”. En Peñalva, S. y Rofman, A. (Comp.), op. cit.
- Mascarell Llosa, M. (2002); “Estrategias familiares de acceso a la vivienda Redes familiares y ayudas intergeneracionales en Hospitalet de Llobregat”. Universidad de Barcelona. Mimeo.
- Menéndez, E. (1998) “Participación social en salud como realidad técnica y como imaginario social”. En *Cuadernos Médico Sociales*, nº 73. Rosario. Centro de Estudios Sanitarios y Sociales.
- Merlinsky, M.G. (1997); “Hábitat, territorio y microemprendimientos en el Conurbano”. En Herzer, H. (Comp.); *Postales urbanas del final del milenio. Una construcción de muchos*. Buenos Aires. Instituto Gino Germani/Oficina de Publicaciones de CBC, Universidad de Buenos Aires.

- Moser, C. (1996); *Confronting Crisis: A comparative study of household responses to poverty and vulnerability in four poor urban communities*. Washington. The World Bank.
- Narv ez, (1997); "Programa de renovaci3n de conventillo". En Rodr guez, M.C. y Procupez, V. (Comp.); *Autogesti3n, rehabilitaci3n y concertaci3n. Experiencias en pol ticas de vivienda popular*. Buenos Aires. Balance/MOI/Secretar a de Desarrollo Social de la Naci3n.
- Ozlack, O. (1997) "Estado y sociedad  Nuevas reglas de juego?". En Revista *Reforma y Democracia*. Caracas. CLAD.
- Ozuekren, S. Y Van Kepen, R. (2002); "Housing Careers of Minority Ethnic Groups: Experiences, explanations and prospects": En *Housing Studies*, Vol. 17, n  3.
- P rez, P. y Gamallo, G. (1994); *Basura privada, servicio p blico. Los residuos en dos ciudades argentinas*. Buenos Aires. CEAL.
- P rez, P.; Mart nez Mendoza, R. y Navarro, A. (1998); "Procesos sociales de integraci3n en la ciudad de Buenos Aires: El caso de la poblaci3n ocupante de casas y su integraci3n en los servicios urbanos". Ponencia presentada en Seminario de Investigaci3n Urbana. El Nuevo Milenio Y Lo Urbano. Instituto Gino Germani. Buenos Aires, noviembre.
- Portes, A. (1999); "Capital social: Or genes y aplicaciones en la sociolog a moderna". En Carpio, J. y Novacovsky, I. (Comp.); *De Igual a Igual. El*

desafío del estado ante los nuevos problemas sociales. Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica/SIEMPRO/FLACSO.

Przeworski, A. (1982); “La teoría sociológica y el estudio de la población: Reflexiones sobre los trabajos de la Comisión de Población y Desarrollo de CLACSO”. En *Reflexiones teórico-metodológicas sobre investigaciones en población*. México. El Colegio de México/CLACSO/Centro de Estudios Económicos y Demográficos.

Rodríguez, M. C. (1997); “Organizaciones de ocupantes de edificios en Capital Federal: La trama poco visible de una ciudad negada”. En Herzer, H. (Comp.); *op. cit.*

Tobelem, A. (1993); *Sistema de Análisis y Desarrollo de la Capacidad Institucional (SADCI). Manual de Operaciones*. División de Administración del Sector Público, Departamento Técnico, Región América Latina y Caribe. Banco Mundial.

Yujnovsky, O. (1984); *Claves políticas para el problema habitacional argentino: 1955-1981*. Buenos Aires. Grupo Editor Latinoamericano.

ⁱ Versiones anteriores de este artículo fueron presentadas en el Seminario Situación y Desafíos de la Investigación Urbana en el Siglo XXI. UNQ – CEUR – IIGG. Buenos Aires, 21 y 22 de Agosto de 2003. Asimismo, recupera cuestiones planteadas en Di Virgilio, 2000.

ⁱⁱ Entendemos por *vivienda* a la “configuración de servicios – servicios habitacionales – que deben dar satisfacción a necesidades humanas primordiales: albergue, refugio, protección ambiental, espacio, vida de relación, seguridad, privacidad, identidad, accesibilidad física, entre otras”. Adherimos de este modo a una concepción amplia de la vivienda, esto es, como hábitat o medio-ambiente (Yujnovsky; 1984: 17 ss).

-
- iii En este trabajo el término *redes* alude a las redes de ayuda basadas en las relaciones que se establecen entre vecinos, amigos, parientes, con el objeto de intercambiar bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades de la vida cotidiana -alimentación, vestuario, vivienda, etc. (Gutiérrez; 1992:170). Estas redes estructuran la interacción de los agentes como resultado de sus estrategias (Baranger, 2002:59).
- iv Las ocupaciones de la Ex AU3 se encuentran en un área expropiada para la construcción de una autopista que daría continuación dentro de la ciudad de Buenos Aires al Acceso Norte. Los inmuebles, de propiedad municipal, se emplazan en una localización residencial de alto valor inmobiliario, donde residen sectores medios y medios altos -en los barrios de Colegiales y Coglián (Rodríguez; 1997).
- v “Un escenario es un ámbito social de encuentro entre individuos, grupos y fuerzas sociales y/o políticas que permite la confrontación de opiniones, aspiraciones, iniciativas y propuestas representativas de una gama de identidades y de intereses específicos de los cuales son portadores tales agentes [...] son lugares de confrontación de intereses y de toma de decisiones sobre las orientaciones políticas y las acciones concretas que deben ser ejecutadas en el marco de la gestión y la prestación de servicios. [En ellos] se despliegan relaciones de poder [...] son asimétricos y en ellos operan factores de desigualdad” (Velázquez, et.. al.; 1992. Citado en Pérez y Gamallo; 1994:20).
- vi El Plan MAS VIDA es un programa de asistencia alimentaria que tiene como finalidad disminuir la morbi-mortalidad infantil atendiendo las necesidades nutricionales de las mujeres embarazadas y de los niños menores de 0 a 5 años, pertenecientes a sectores pobres estructurales de la Provincia de Buenos Aires. El programa se propone alcanzar esta meta estimulando la participación de las mujeres, con el objeto de crear una red solidaria para el cuidado de su salud y la de su familia, a través de la organización comunitaria. Esto es, a través de la distribución diaria de raciones de leche, cereales y huevos realizada por trabajadoras vecinales o *manzaneras*. Este Programa continúa las intervenciones iniciadas en el marco del Plan VIDA. Alcanza a 650.000 familias y cuenta con el aporte diario y voluntario de 38.000 trabajadoras vecinales o *manzaneras*.
- vii Los que se encuentran vigentes en la actualidad son el Jefes y jefas de Hogar Desocupados y, en la órbita de la provincia de Buenos Aires, el Plan Barrios Bonaerenses.
- viii Los procesos de descentralización y privatización puestos en marcha con la reforma del estado contribuyeron a acentuar esta tendencia (Oszlak; 1997).
- ix El entonces Concejo Deliberante declara el estado de emergencia habitacional en La Boca. La partida presupuestaria constituye un fondo específico de U\$S 1.500.000, que fue previsto por única vez y asignado a la CMV, quien instrumentó su uso a través de la resolución 525/97 y 282/98. La CMV incrementó este fondo con parte de los recursos FONAVI, generando una partida total de U\$S 3.000.000 “para la emergencia habitacional”. Dicha partida representó un 7% de su presupuesto total anual de 1998 (Di Virgilio, Lanzetta, Redondo y Rodríguez, 2002).
- x Esta Asamblea de Desalojados, es la instancia matriz de la cual, por un proceso de sucesivas fragmentaciones, surgen un amplio conjunto de organizaciones que asumen la reivindicación de la vivienda: la Mutual de Desalojados de La Boca, La Asociación Civil Pro Techo, la línea de hábitat del Comedor Los Pibes, Techo y Trabajo y, más tarde, Manos Solidarias, Construyendo, etc.
- xi La primera organización comunitaria que se constituye formalmente es la Mutual de Desalojados de La Boca, Barracas y San Telmo.
- xii Para ello recibieron préstamos personales con garantía hipotecaria por parte de la CMV.
- xiii La investigación que Cravino et al. (2002) llevan adelante en un asentamiento del GBA pone de manifiesto que numerosas familias de sectores populares viven literalmente sin ningún tipo de ingreso monetario.

^{xiv} Los resultados que aquí se comentan pueden leerse en Di Virgilio, Lanzetta, Redondo y Rodríguez, 2002.

^{xv} La mutual se constituyó en 1990 por iniciativa del intendente Grosso. La gestión Grosso generó, desde el ámbito de la Secretaría de Planeamiento, un conjunto de acciones tendientes a ampliar la *estructura de oportunidades* (Cunil Grau; 1997:170) de los sectores populares desarrollando metodologías participativas. La caída del "Grossismo" reafirma la interrupción de estos proyectos que ya se habían debilitado hacia el final de su gestión. El carácter de las gestiones posteriores, pierde definitivamente el cariz integrador de sectores de escasos ingresos al mapa social de la ciudad y se aviene al endurecimiento de las posiciones políticas nacionales.

^{xvi} El capital social "es el conjunto de recursos actuales o potenciales que están ligados a la posesión de una red durable de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento mutuo" (Bourdieu; 1980:3 ss). Una reseña completa del concepto puede leerse en Portes, 1999 y Baranger, 2002.

^{xvii} El concepto de *capacidad institucional* involucra cinco dimensiones analíticas: (1) reglas de juego, (2) relaciones Interinstitucionales, (3) organización Interna de los distintos actores y la asignación de funciones, (4) disponibilidad de recursos físicos y humanos y (5) política de personal y las capacidades individuales.

^{xviii} La representación funcional alude a los arreglos organizacionales que se constituyen a partir de la representación de intereses sociales sectoriales.

^{xix} Para un desarrollo amplio del caso véase Rodríguez, 1997.

^{xx} Para un desarrollo amplio del caso véase Herzer et al. 1997 y 2000).